



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero y  
Ponente

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Besteiro Rivas, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 19 de febrero de 2004, ha examinado el *expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

## DICTAMEN

### I

#### ANTECEDENTES DE HECHO

El día 21 de enero de 2004 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente relativo a la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, por los daños producidos por unos osos en unas colmenas de su propiedad.*

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 27 de enero de 2004, se procedió a darle entrada en el Registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 66/2004, iniciándose el cómputo del plazo para su evacuación, tal como dispone el artículo 53 del Decreto 102/2003, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su Ponencia al Consejero Sr. Estella Hoyos.

**Primero.-** Con fecha de 17 de junio de 2003 tuvo entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxxx, la solicitud presentada por D. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx de indemnización de los daños producidos por unos osos en cinco colmenas de su propiedad, situadas en el paraje "xxxxxxxx" en la localidad de xxxxxxxx (xxxxx). El 24 de julio de 2003 adjunta documentación relativa a la titularidad de las colmenas dañadas, consistente en fotocopia compulsada de la Cartilla de Explotación Apícola y de Trashumancia.



**Segundo.-** Habiendo sido notificado el daño el 11 de junio de 2003 al agente forestal, éste asistió diligentemente el 12 del mismo mes y año a verificar el daño. El Jefe de Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, el 29 de julio de 2003, realiza una valoración de los daños por un importe total de 725 €.

**Tercero.-** El 12 de agosto de 2003 se acuerda por el Delegado Territorial de la provincia el nombramiento de instructor, notificándose al interesado.

**Cuarto.-** En el trámite de audiencia concedido al interesado el 5 de septiembre de 2003, éste no realiza alegación alguna.

**Quinto.-** Con fecha de 7 de octubre de 2003, el instructor formula propuesta de Resolución en sentido estimatorio de la reclamación presentada por el interesado.

**Sexto.-** La Asesoría Jurídica, el 28 de octubre de 2003, informa favorablemente la mencionada propuesta de Resolución, señalando no obstante que ha de añadirse el correspondiente pie de recurso.

**Séptimo.-** El expediente consta de índice numerado de documentos sin foliar, como sería conveniente para facilitar su mejor manejo.

Y, en tal estado del expediente, V.E. dispuso su remisión al Consejo Consultivo de Castilla y León para que evacuara dictamen.

## **II CONSIDERACIONES JURÍDICAS**

**1ª.-** El Consejo Consultivo de Castilla y León emite dictamen en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo prevenido en los artículos 4.1.h,1º y 19.2 de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen de acuerdo con lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g) del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.



**2ª.-** El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueban los procedimientos a seguir por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Por otra parte, y de acuerdo con el Informe de 20 de octubre de 2003 de la Asesoría Jurídica, debe añadirse el correspondiente pie de recurso, alegación que entendemos conforme a derecho en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, hay que añadir la posibilidad de interponer recurso de reposición conforme a los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 61.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio.

**3ª.-** Ante todo, procede señalar que concurren en el interesado los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que la competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxxx, en virtud de lo establecido en los artículos 82.2 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 19 a) del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, sobre atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus Órganos Directivos Centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

Ha de corregirse por tanto la fecha del citado Decreto, al ser éste de 18 de noviembre y no de 24 de ese mismo mes.

**4ª.-** El asunto sometido a consulta versa sobre la reclamación formulada por D. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx por los daños causados por unos osos en unas colmenas de su propiedad.

El artículo 106.2 de la Constitución establece que *"los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos"*.



La referencia constitucional a la Ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Tales preceptos han sido desarrollados reglamentariamente por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 1-3-1998; 21-4-1998; 29-10-1998; 28-1-1999; 1 y 25-10-1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (dictámenes de 27-3-2003, expte. nº 183/2003; 6-2-2003, expte. nº 3583/2002; y 9-1-2003, expte. nº 3251/2002), la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada este Consejo Consultivo estima, al igual que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que existe responsabilidad por parte de la Administración de la



Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños producidos, al concurrir todos los requisitos mencionados.

En concreto, el interesado ha ejercitado su derecho en tiempo hábil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, consta que lo hizo con fecha 3 de julio de 2003, antes de transcurrir un año desde la fecha del hecho causante, que tuvo lugar aproximadamente, tal como consta en el informe del Agente forestal, el 15 de junio de 2003.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 3, apartado Siete, del Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un Estatuto de Protección del Oso Pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del Oso Pardo, *“serán indemnizables, previo expediente incoado al efecto, los daños y perjuicios que ocasionalmente pueda causar esta especie en todo el territorio de la Comunidad y que sean debidamente comprobados”*.

Se pone de manifiesto en el expediente que en el caso que nos ocupa los daños fueron producidos por un oso. Así consta en el clarificador informe del Agente Forestal, cuando en el espacio reservado, en el impreso de solicitud, para exponer las características del daño, posible causa que lo originó, existencia de restos, etc., cumple debidamente su cometido. Dicho Agente acudió a comprobar los hechos a los pocos días de haberse producido éstos.

Siendo el oso pardo, tal como señala el mencionado Decreto 108/1990, una especie protegida y catalogada en peligro de extinción por el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo que regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y concurriendo el resto de requisitos expuestos, tal como se desprende tanto del informe del Agente, como de la conformidad del Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, la consecuencia es el deber de la Administración de indemnizar en la cuantía correspondiente.

En este mismo sentido se ha venido pronunciando el Consejo de Estado en sus Dictámenes más recientes (entre otros, nº 1.666/2003 y nº 1.563/2003).



**CONSEJO  
CONSULTIVO**  
DE CASTILLA Y LEÓN

### **III CONCLUSIONES**

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina favorablemente la propuesta de Resolución estimatoria en el expediente de responsabilidad patrimonial por los daños producidos por unos osos en las colmenas propiedad de D. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, por entender que resulta conforme al ordenamiento jurídico.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.